



Sra. Salgueiro Cortiñas, Presidenta

Sr. Estella Hoyos, Consejero
Sr. Fernández Costales, Consejero
Sr. Pérez Solano, Consejero
Sr. Quijano González, Consejero
Sr. Madrid López, Consejero
Sr. Nalda García, Consejero y
Ponente

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 9 de febrero de 2006, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 25 de enero de 2006 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx debido a los daños ocasionados por el ciervo en unos cultivos de cebada*.

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 26 de enero de 2006, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 135/2006, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Nalda García.

Primero.- Con fecha 30 de septiembre de 2003, tiene entrada en el registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxx una solicitud de indemnización, de D. xxxxx, debido a los daños ocasionados por el ciervo en unos cultivos de cebada de su propiedad, procedente de la Reserva Regional de Caza de xxxxx, durante la primavera y el verano de 2003.



Segundo.- Consta en el expediente el informe del Jefe de la Sección de Vida Silvestre del Servicio Territorial de Medio Ambiente de xxxxx, de fecha 3 de octubre de 2005, favorable a la reclamación presentada, al entender que el animal causante de los daños procede de la vecina Reserva Regional de Caza de xxxxx cuya titularidad y gestión corresponde a la Junta de Castilla y León.

El citado informe se acompaña de la valoración de los daños efectuada por la Sección tomando como base los datos aportados por el personal que supervisó los daños, así como los facilitados por el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de xxxxx, que en el presente caso asciende a 583,70 euros.

Tercero.- Mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2005, se acuerda el nombramiento del instructor, notificado al interesado el 1 de septiembre de 2005.

Cuarto.- El día 10 de octubre de 2005, concluida la instrucción del expediente, se da audiencia y vista del mismo al interesado (notificado el 14 de octubre de 2005), a efectos de que formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime oportunos, sin que durante el plazo concedido al efecto presente alegación alguna.

Quinto.- El Instructor del expediente formula la propuesta de resolución con fecha 4 de noviembre de 2005, de carácter estimatorio, reconociendo el derecho que le asiste a ser indemnizado con 583,70 euros.

Sexto.- El 10 de noviembre de 2005 la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial informa favorablemente sobre la propuesta de resolución indicada.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el



artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado g), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

No obstante, es preciso destacar que se ha producido una demora injustificada entre la interposición de la reclamación, en septiembre de 2003, y la propuesta de resolución, en noviembre de 2005. Desde que se interpone la reclamación hasta que se acuerda el nombramiento del instructor en agosto de 2005, pasan casi dos años. Este retraso necesariamente ha de considerarse como una vulneración por la Administración de principios y criterios relativos a su actuación recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como los de eficacia, celeridad, eficiencia y servicio a los ciudadanos, entre otros, sin olvidar el incremento, por actualización, que ha de conllevar necesariamente la cantidad que como indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración se vaya a conceder al reclamante, en su caso, mediante la oportuna resolución.

A este respecto, debe tenerse presente que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anomalía en la tramitación de procedimientos. Así como que los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 47 de la Ley 30/1992, ya citada.



3ª.- Concurren en el interesado los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992. La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 142.2 de la mencionada Ley 30/1992 y 19 del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus órganos directivos centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero de 1999; 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expte. nº 183/2003; 6 de febrero de 2003, expte. nº 3.583/2002; y 9 de enero de 2003, expte. nº 3.251/2002), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.



d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexos causales que implican la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación formulada por D. xxxxx debido a los daños ocasionados por el ciervo en cultivos de cebada de su propiedad, procedente de la Reserva Regional de Caza de xxxxx, durante la primavera y el verano de 2003.

El interesado ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esto es, antes de transcurrir el plazo de un año desde la fecha del hecho causante.

6ª.- En cuanto al fondo de la cuestión planteada estima este Consejo Consultivo, de igual modo que los órganos que han informado previamente, que existe responsabilidad por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los daños causados.

El ciervo tiene la consideración de especie cinegética de caza mayor, tal y como se deduce del anexo del Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y León. Además, se considera pieza de caza, según el artículo 9 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, y las órdenes anuales de caza de la Consejería de Medio Ambiente.

De acuerdo con el artículo 12 del citado texto legal, en la redacción vigente en el momento de producirse los daños, "la responsabilidad de los daños producidos por la pieza de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá a:

»a) En los terrenos cinegéticos, a quien ostente la titularidad cinegética de dichos terrenos, independientemente de que las piezas de caza



pertenezcan a una especie incluida o no en el correspondiente plan de aprovechamiento cinegético, salvo lo dispuesto en el artículo 57 de la presente Ley sobre palomares industriales.

»A tales efectos, tendrá la consideración de titular cinegético de las zonas de Caza Controlada, la Junta o la sociedad de cazadores concesionaria, en su caso.

»b) En los terrenos vedados, a los propietarios de los mismos, cuando la condición de vedado se derive de un acto voluntario de éstos o a la Junta.

»c) En los refugios de fauna, a la Junta.

»d) En las zonas de Seguridad, a los titulares cinegéticos de los terrenos, a los propietarios de los vedados de carácter voluntario o a la Junta en el resto de terrenos vedados y en el de los refugios de fauna”.

En el caso que nos ocupa no obran en el expediente datos que permitan calificar la naturaleza de los terrenos en los que se han producido los daños (hecho puesto de manifiesto por el Jefe de la Sección de Vida Silvestre en su informe), circunstancia que dificulta la aplicación del régimen señalado para imputar a la Administración la responsabilidad por los daños causados por los ciervos en este supuesto.

Lo que sí se ha acreditado, sin embargo, es que los terrenos se hallan a una distancia de dos kilómetros de la Reserva Regional de Caza de xxxxx, de la que es titular la Junta de Castilla y León. En este espacio natural “durante los años anteriores al 2003” hubo una importante proliferación de ejemplares de esas especies, como consecuencia de la acción administrativa de gestión de la reserva regional de caza, “lo que hacía que un importante número de ciervos acudiese a las zonas limítrofes en busca de alimento causando importantes daños en los cultivos” y que “respecto al año 2003 (...) todavía se puede observar la presencia residual de algunos ejemplares procedentes de la Reserva (...)”.

El Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de xxxxx, establece en su artículo 9 como objetivo prioritario a cumplir por el espacio protegido el de “conservar y proteger los recursos naturales, su vegetación, flora, fauna, gea y paisaje,



preservando la diversidad genética y manteniendo la dinámica y estructura funcional de los ecosistemas”, finalidad que deberá coordinarse con la de promoción del “desarrollo socioeconómico de las poblaciones del Espacio Natural y mejora de su calidad de vida, de forma compatible con la conservación de sus valores”. Estas competencias de la Administración, como gestora del espacio natural, la obligan a responder de los daños causados como consecuencia de las actividades que emprenda para la consecución de los objetivos del espacio protegido.

Por lo anterior, podemos concluir que el título de imputación de la responsabilidad administrativa en el expediente que nos ocupa se halla en la acción de gestión de la reserva regional de caza por parte de la Administración, como consecuencia de la cual se ha producido un aumento de especies en aquélla, sin que los titulares de los terrenos aledaños tengan el deber jurídico de soportar las consecuencias perjudiciales que en sus terrenos puedan provocar, todo ello sin perjuicio de considerar, tal y como indica en su informe el Jefe de la Sección de Vida Silvestre, “la excepcionalidad de esta consideración respecto a años posteriores”.

El criterio expuesto es el que se mantiene por este Consejo Consultivo, entre otros, en el Dictamen 1.006/2005, de 24 de noviembre, referido a la responsabilidad de la Administración por los daños causados por aves en terrenos colindantes a espacios naturales –humedales– gestionados por la Junta de Castilla y León, en los que se considera igualmente la procedencia de estimar la reclamación al derivar los daños de las actuaciones concretas de recuperación de dichos espacios.

7ª.- Respecto al importe de la indemnización, este Consejo Consultivo considera procedente indemnizar al reclamante, de acuerdo con la valoración efectuada durante la instrucción, con la cantidad de 583,70 euros.

Todo ello sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



**CONSEJO
CONSULTIVO**
DE CASTILLA Y LEÓN

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución estimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx debido a los daños ocasionados por el ciervo en unos cultivos de cebada.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.